



CUESTIONARIO DE PREGUNTAS

CUERPO DE LETRADOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL

ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL

EJERCICIO ÚNICO

FECHA 17/02/2024

*ORDEN DE 12 DE DICIEMBRE DE 2022, DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,
HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN DIGITAL, POR LA QUE SE CONVOCAN PRUEBAS
SELECTIVAS PARA CUBRIR 1 PLAZA DEL CUERPO DE LETRADOS DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL, (CÓDIGO ADX00C22-4)*

(BORM nº 291, de 19 de diciembre de 2022)

1. Según establecen los artículos 1.309 y 1.313 del Código Civil, la confirmación de un contrato anulable purifica los vicios de que adoleciera:

- a) Desde el momento de su celebración.
- b) Desde el momento de la confirmación.
- c) Desde el momento que las partes acuerden.
- d) Desde el momento que cesó la causa de su nulidad.

2. Señale la respuesta correcta:

- a) Si el usufructo se constituyere sobre un rebaño o piara de ganados, el usufructuario estará obligado a reemplazar con las crías las cabezas que mueran anual y ordinariamente, o falten por la depredación de otros animales.
- b) Si el usufructo se constituyere sobre un rebaño o piara de ganados, el usufructuario estará obligado a reemplazar con las crías las cabezas que mueran semestral y ordinariamente, o falten por la depredación de otros animales.
- c) Si el usufructo se constituyere sobre un rebaño o piara de ganados, el usufructuario estará obligado a reemplazar con las crías las cabezas que mueran trimestral y ordinariamente, o falten por la depredación de otros animales.
- d) Ninguna es correcta.

3. Según el artículo 460.4 del Código Civil, el poseedor puede perder su posesión por la posesión de otro, aun contra la voluntad del antiguo poseedor, si la nueva posesión hubiese durado más de:

- a) Un año.
- b) Dos años
- c) Tres años
- d) Cuatro años.

4. Según el artículo 484 del Código Civil, si a consecuencia de un siniestro o caso extraordinario, las viñas, olivares u otros árboles o arbustos hubieran desaparecido en número tan considerable que no fuese posible o resultase demasiado gravosa la reposición, el usufructuario podrá dejar los pies muertos, caídos o tronchados a disposición del propietario, y exigir de éste:

- a) Prorrogar el usufructo.
- b) Suspender el usufructo por 6 meses.
- c) Que los retire y deje el suelo expedito.
- d) La a y b son correctas.

5. Según el artículo 537 del Código Civil, las servidumbres continuas y aparentes se adquieren en virtud de título o por prescripción de:

- a) De quince años
- b) De veinte años
- c) De diez años
- d) No establece plazo de prescripción.

6. Según el artículo 554 del Código Civil, cuando para la derivación o toma de aguas de un río o arroyo, o para el aprovechamiento de otras corrientes continuas o discontinuas, fuere necesario establecer una presa, y el que haya de hacerlo no sea dueño de las riberas o terrenos en que necesite apoyarla, podrá establecer la servidumbre de estribo de presa, previa:

- a) La indemnización correspondiente.
- b) Autorización del ayuntamiento competente.
- c) Autorización del dueño de las riberas o terrenos.
- d) A y c son correctas.

7. Según el artículo 582 del Código Civil, no se puede abrir ventanas con vistas rectas, ni balcones u otros voladizos semejantes, sobre la finca del vecino, si entre la pared en que se construyan y dicha propiedad:

- a) No hay dos metros de distancia.
- b) No hay un metro de distancia.
- c) No hay un metro y medio de distancia.
- d) No hay consentimiento del vecino.

8. Según el artículo 677 del Código Civil, el testamento hecho en país extranjero es:

- a) Común
- b) Especial
- c) Militar
- d) Ninguna respuesta es correcta.

9. Según el artículo 689 del Código Civil, el testamento ológrafo deberá protocolizarse, presentándolo ante Notario:

- a) En los cinco años siguientes al fallecimiento del testador.
- b) En los cuatro años siguientes al fallecimiento del testador.
- c) En los dos años siguientes al fallecimiento del testador.
- d) Ninguno de los plazos anteriores es correcto.

10. Según el artículo 1964 del Código Civil, la acción hipotecaria prescribe:

- a) A los veinte años.
- b) A los diez años.
- c) A los quince años
- d) Treinta años.

11. Según el artículo 1957 del Código Civil, el dominio y demás derechos reales sobre bienes inmuebles se prescriben por la posesión durante:

- a) Cinco años entre presentes y diez entre ausentes, con buena fe y justo título.
- b) Quince años entre presentes y treinta entre ausentes, con buena fe y justo título.
- c) Diez años entre presentes y veinte entre ausentes, con buena fe y justo título.
- d) Veinte años entre presentes y diez entre ausentes, con buena fe y justo título.

12. Según el artículo 811 del Código Civil, el ascendiente que heredare de su descendiente bienes que éste hubiese adquirido por título lucrativo de otro ascendiente, o de un hermano, se halla obligado a reservar los que hubiere adquirido por ministerio de la ley en favor de los parientes que estén dentro:

- a) Del primer grado.
- b) Del segundo grado.
- c) Del tercer grado.
- d) Del cuarto grado.

13. Según el artículo 887 del Código Civil, si los bienes de la herencia no alcanzaren para cubrir todos los legados, se pagará en primer lugar:

- a) Los legados de alimentos.
- b) Los legados de educación.
- c) Los legados que el testador haya declarado preferentes.
- d) Los legados remuneratorios.

14. Según el artículo 1750 del Código Civil, si no se pactó la duración del comodato ni el uso a que había de destinarse la cosa prestada, y éste no resulta determinado por la costumbre de la tierra, puede el comodante reclamarla:

- a) Trascurrido 6 meses.
- b) Trascurrido un año.
- c) Trascurrido 3 meses.
- d) A su voluntad.

15. Según dispone el artículo 1.171 del Código Civil, en las obligaciones de entregar cosa determinada, cuando no se designa el lugar donde debe ejecutarse el pago:

- a) Deberá hacerse en el lugar en el que exista la cosa al momento de constituirse la obligación.
- b) Deberá hacerse en el domicilio del deudor al momento de constituirse la obligación.
- c) Deberá hacerse en el domicilio del acreedor al momento de constituirse la obligación.
- d) Deberá hacerse en el lugar que designe el deudor al momento de constituirse la obligación.

16. Señale la opción correcta relativa al régimen de las obligaciones sujetas a condición:

- a) Las condiciones prohibidas por las leyes se tienen por no puestas
- b) Las condiciones prohibidas por las leyes anularán la obligación que de ella dependa.
- c) Se tendrá por cumplida la condición cuando el obligado impidiese, voluntaria o involuntariamente, su cumplimiento.
- d) El Código Civil contiene regulación sobre las condiciones suspensivas pero no sobre las condiciones resolutorias.

17. En relación a las obligaciones condicionales, según el artículo 1115 del Código Civil, señale la opción correcta:

- a) Cuando el cumplimiento de la condición dependa de la exclusiva voluntad del acreedor, la obligación condicional será nula. Si dependiere de la suerte o de la voluntad del deudor, la obligación surtirá todos sus efectos
- b) Cuando el cumplimiento de la condición dependa de la exclusiva voluntad del acreedor o del deudor, la obligación condicional será nula. Si dependiere de la suerte, la obligación surtirá todos sus efectos.
- c) Cuando el cumplimiento de la condición dependa de la exclusiva voluntad del deudor, la obligación condicional será nula. Si dependiere de la suerte o de la voluntad de un tercero, la obligación surtirá todos sus efectos.
- d) Cuando el cumplimiento de la condición dependa de la suerte, la obligación condicional será nula. Si dependiere de la voluntad del acreedor, o del deudor, o de un tercero, la obligación surtirá todos sus efectos con arreglo a las disposiciones de este Código.

18. En relación a las obligaciones, señale la opción correcta, de acuerdo con el régimen previsto en el Código Civil:

- a) En las obligaciones alternativas, la elección corresponde al deudor, a menos que expresamente se hubiese concedido al acreedor.
- b) En las obligaciones a plazo, los Tribunales fijarán la duración del plazo cuando éste haya quedado a voluntad del acreedor.
- c) En las obligaciones a plazo, el deudor pierde el derecho a utilizar el plazo cuando, después de contraída la obligación, resulte insolvente, en todo caso.
- d) En las obligaciones a plazo, si el plazo de la obligación está señalado por días a contar desde uno determinado, éste se incluye en el cómputo.

19. En relación a las obligaciones con cláusula penal, de acuerdo con el artículo 1152 del Código Civil, señale la opción correcta:

- a) La nulidad de la cláusula penal lleva consigo la de la obligación principal.
- b) En las obligaciones con cláusula penal, si no hay pacto distinto entre las partes, la pena sustituirá sólo el abono de intereses en caso de falta de cumplimiento.
- c) En las obligaciones con cláusula penal, si no hay pacto distinto entre las partes, la pena sustituirá a la indemnización de daños y el abono de intereses en caso de falta de cumplimiento.
- d) El deudor podrá eximirse de cumplir la obligación pagando la pena, aunque la obligación haya guardado silencio sobre este punto.

20. De acuerdo con Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, la inscripción de las Asociaciones en el Registro de Asociaciones es:

- a) Voluntaria y declarativa
- b) Obligatoria y declarativa
- c) Obligatoria y constitutiva
- d) La Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación no regula en ningún artículo la inscripción.

21. A tenor de lo establecido el artículo 1 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, cuando el capital, que estará dividido en acciones, se integre por las aportaciones de todos los socios, uno de los cuales, al menos, responda personalmente de las deudas sociales como socio colectivo, estamos ante una:

- a) Sociedad cooperativa
- b) Sociedad colectiva
- c) Sociedad comanditaria por acciones
- d) Sociedad comanditaria por participaciones

22. La acción de impugnación de los acuerdos sociales caducará, tal y como establece el artículo 105 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, en el plazo de:

- a) 6 meses, salvo que tenga por objeto acuerdos que, por sus circunstancias, causa o contenido resultaren contrarios al orden público, en cuyo caso la acción no caducará ni prescribirá
- b) 1 año, salvo que tenga por objeto acuerdos que, por sus circunstancias, causa o contenido resultaren contrarios al orden público, en cuyo caso la acción no caducará ni prescribirá
- c) 1 año en todo caso
- d) 4 años, salvo que tenga por objeto acuerdos que, por sus circunstancias, causa o contenido resultaren contrarios al orden público, en cuyo caso la acción no caducará ni prescribirá

23. Al amparo de lo dispuesto en el artículo 221.2 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, los administradores de la sociedad anónima ejercerán el cargo durante el plazo que señalen los estatutos sociales, que no podrá exceder de:

- a) 4 años
- b) 6 años
- c) 8 años
- d) 10 años

24. En cuanto al régimen de transmisión de las participaciones sociales en la sociedad de responsabilidad limitada, señale la opción correcta prevista en el artículo 108 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital:

- a) Serán nulas las cláusulas estatutarias que hagan prácticamente libre la transmisión voluntaria de participaciones sociales por actos inter vivos
- b) Serán nulas las cláusulas estatutarias que hagan prácticamente prohibida la transmisión voluntaria de participaciones sociales por actos inter vivos
- c) Serán nulas las cláusulas estatutarias que hagan prácticamente prohibida la transmisión voluntaria de participaciones sociales por actos inter vivos o mortis causa
- d) El del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital no contiene previsión al respecto.

25. El capital de la sociedad de responsabilidad limitada no podrá ser inferior a:

- a) 1 euro
- b) 3.000 euros
- c) 6.000 euros
- d) 2 euros.

26. Según el artículo 106 de la Ley 19/1985, de 16 de julio, Cambiaria y del Cheque, la persona que expide el cheque se llama:

- a) Librado
- b) Librador
- c) Empresario
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

27. Según el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en la audiencia previa, el demandado no podrá impugnar:

- a) Falta del debido litisconsorcio.
- b) La reconvencción.
- c) La competencia objetiva.
- d) Inadecuación del procedimiento.

28. Conforme al artículo 444 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, señale la respuesta correcta:

- a) Cuando en el juicio verbal se pretenda la recuperación de finca, rústica o urbana, dada en arrendamiento, por impago de la renta o cantidad asimilada sólo se permitirá al demandado alegar y probar el pago o las circunstancias relativas a la procedencia de la enervación.
- b) Cuando en el juicio ordinario se pretenda la recuperación de finca, rústica o urbana, dada en arrendamiento, por impago de la renta o cantidad cabe reconvencción por el demandado.
- c) Cuando en el juicio verbal se pretenda la recuperación de finca, rústica o urbana, dada en usufructo, sólo se permitirá al demandado alegar y probar el pago o las circunstancias relativas a la procedencia de la enervación.
- d) Cuando en el juicio ordinario se pretenda la recuperación de finca, rústica o urbana, dada en usufructo, por impago de la renta o cantidad asimilada sólo se permitirá al demandado alegar y probar el pago o las circunstancias relativas a la procedencia de la enervación.

29. Señale la respuesta correcta según el artículo 451 de la Ley de Enjuiciamiento Civil:

- a) La interposición del recurso de reposición no tendrá efectos suspensivos respecto de la resolución recurrida.
- b) La interposición del recurso de reposición tendrá efectos suspensivos respecto de la resolución recurrida.
- c) Contra las diligencias de ordenación y decretos no definitivos cabrá recurso de revisión ante el Letrado de la Administración de Justicia que dictó la resolución recurrida.
- d) Contra las diligencias de ordenación y decretos definitivos cabrá recurso de reposición ante el Letrado de la Administración de Justicia que dictó la resolución recurrida.

30. Según el artículo 67.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, cuando el pleito es declarado concluso, se dictará sentencia en el plazo de:

- a) 10 días
- b) 20 días
- c) 15 días
- d) ninguna es correcta

31. Sobre las alegaciones previas, según el artículo 58 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativo, señale la respuesta correcta:

- a) Las partes demandadas podrán alegar, dentro de los primeros tres días del plazo para contestar la demanda, los motivos que pudieren determinar la incompetencia del órgano jurisdiccional o la inadmisibilidad del recurso con arreglo a lo dispuesto en el artículo 69, sin perjuicio de que tales motivos, salvo la incompetencia del órgano jurisdiccional, puedan ser alegados en la contestación, incluso si hubiesen sido desestimados como alegación previa.
- b) Las partes demandadas podrán alegar, dentro de los primeros diez días del plazo para contestar la demanda, los motivos que pudieren determinar la incompetencia del órgano jurisdiccional o la inadmisibilidad del recurso con arreglo a lo dispuesto en el artículo 69, sin perjuicio de que tales motivos, salvo la incompetencia del órgano jurisdiccional, puedan ser alegados en la contestación, incluso si hubiesen sido desestimados como alegación previa.
- c) Las partes demandadas podrán alegar, dentro de los primeros ocho días del plazo para contestar la demanda, los motivos que pudieren determinar la incompetencia del órgano jurisdiccional o la inadmisibilidad del recurso con arreglo a lo dispuesto en el artículo 69, sin perjuicio de que tales motivos, salvo la incompetencia del órgano jurisdiccional, puedan ser alegados en la contestación, incluso si hubiesen sido desestimados como alegación previa.
- d) Para hacer uso de este trámite la Administración demandada habrá de acompañar el expediente administrativo si no lo hubiera remitido antes.

32. Según los artículos 18 a 22, sobre representación y defensa procesales, de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social; señale la respuesta correcta:

- a) Las partes podrán comparecer por sí mismas o conferir su representación a abogado, procurador, graduado social colegiado o cualquier persona que se encuentre en el pleno ejercicio de sus derechos civiles. La representación podrá conferirse mediante poder otorgado por comparecencia ante el secretario judicial o por escritura pública.
- b) En sus actuaciones ante órganos unipersonales, las partes podrán conferir su representación a un Procurador y serán asistidas, en todo caso, por Abogado.
- c) La defensa por abogado y la representación técnica por graduado social colegiado tendrá carácter facultativo en la instancia. En el recurso de suplicación los litigantes habrán de estar defendidos por abogado o representados técnicamente por graduado social colegiado. En el recurso de casación y en las actuaciones procesales ante el Tribunal Supremo será recomendable la defensa de abogado.
- d) La representación y defensa de las Entidades Gestoras y de los Servicios Comunes de la Seguridad Social corresponderá a la Abogacía del Estado, sin perjuicio de que para supuestos determinados pueda conferirse la representación conforme a las reglas generales del artículo 18 o designarse abogado al efecto.

33. Según el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, Constituye Infracción grave en materia de prevención de riesgos laborales:

- a) No disponer el contratista o subcontratista de la documentación o título que acredite la posesión de la maquinaria que utiliza, y de cuanta documentación sea exigida por las disposiciones legales vigentes.
- b) No comunicar a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo o la reanudación o continuación de los trabajos después de efectuar alteraciones o ampliaciones de importancia, o consignar con inexactitud los datos que debe declarar o cumplimentar, siempre que no se trate de industria calificada por la normativa vigente como peligrosa, insalubre o nociva por los elementos, procesos o sustancias que se manipulen.
- c) No realizar los reconocimientos médicos y pruebas de vigilancia periódica del estado de salud de los trabajadores que procedan conforme a la normativa sobre prevención de riesgos laborales, o no comunicar su resultado a los trabajadores afectados.
- d) No observar las normas específicas en materia de protección de la seguridad y la salud de las trabajadoras durante los períodos de embarazo y lactancia.

34. Según el artículo 238 de la Ley General de la Seguridad Social ,las mejoras voluntarias de la acción protectora del Régimen General podrán efectuarse a través de:

- a) Mejora indirecta de las prestaciones.
- b) Establecimiento de tipos de cotización adicionales.
- c) Habrá que estar a los Presupuestos Generales del Estado para cada año.
- d) Ninguna es correcta

35. Según el artículo 164.1 de la Ley General de la Seguridad Social,

- a) Todas las prestaciones económicas que tengan su causa en accidente de trabajo o enfermedad profesional se aumentarán, según la gravedad de la falta, de un 30 a un 50 por ciento.
- b) Todas las prestaciones económicas que tengan su causa en accidente de trabajo o enfermedad profesional se aumentarán en un 40 por ciento.
- c) Todas las prestaciones económicas que tengan su causa en accidente de trabajo o enfermedad profesional se aumentarán en un 50 por ciento.
- d) Todas las prestaciones económicas que tengan su causa en accidente de trabajo o enfermedad profesional se aumentarán, según la gravedad de la falta, de un 40 a un 50 por ciento.

36. Según el artículo 40.1 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, la decisión de traslado deberá ser notificada por el empresario al trabajador, así como a sus representantes legales, con una antelación mínima de:

- a) 10 días
- b) 15 días
- c) 20 días
- d) 30 días

37. De conformidad con lo dispuesto en el art. 150.1 de la Constitución Española:

- a) Las Cortes Generales, en materias de competencia de las comunidades autónomas, podrán atribuir a todas o a alguna de las Comunidades Autónomas la facultad de dictar, para sí mismas, normas legislativas en el marco de los principios, bases y directrices fijados por una ley autonómica.
- b) Las Cortes Generales, en materias de competencia estatal, podrán atribuir a todas o a alguna de las Comunidades Autónomas la facultad de dictar, para sí mismas, normas legislativas en el marco de los principios, bases y directrices fijados por una ley estatal. Sin perjuicio de la competencia de los Tribunales, en cada ley marco se establecerá la modalidad del control de las Cortes Generales sobre estas normas legislativas de las Comunidades Autónomas.
- c) Las Cortes Generales nunca podrán atribuir a las Comunidades Autónomas la facultad de dictar, para sí mismas, normas legislativas en el marco de los principios, bases y directrices fijados por una ley estatal.
- d) Ninguna de las anteriores es correcta..

38. De conformidad con la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, la declaración de inconstitucionalidad podrá promoverse:

- a) Mediante el recurso de inconstitucionalidad y mediante la cuestión de inconstitucionalidad promovida por Jueces o Tribunales.
- b) Sólo mediante la cuestión de inconstitucionalidad promovida por Jueces y Tribunales.
- c) Sólo mediante el recurso de inconstitucionalidad que se formulará dentro del plazo de tres meses a partir de la publicación de la Ley o acto con fuerza de ley impugnado.
- d) Mediante el recurso de inconstitucionalidad, mediante la cuestión de inconstitucionalidad y mediante el recurso de amparo.

39. Según la regulación establecida en la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, es requisito para interponer el recurso de amparo:

- a) En el caso de las violaciones de los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional, que tuvieran su origen inmediato y directo en un acto u omisión de un órgano judicial, es requisito que se hayan agotado todos los medios de impugnación previstos por las normas procesales para el caso concreto dentro de la vía judicial.
- b) Los derechos y deberes de los ciudadanos reconocidos en la Sección 2ª del Capítulo II del Título I de la Constitución Española serán susceptibles de amparo constitucional, en los casos y formas que esta Ley establece, sin perjuicio de su tutela general encomendada a los Tribunales de Justicia.
- c) Es requisito, en todo caso, que se interponga el recurso de amparo constitucional en el plazo de los cinco días siguientes a la notificación de la resolución recaída en el previo proceso judicial.
- d) En el caso de violaciones de los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional, que tuvieran su origen inmediato y directo en un acto u omisión de un órgano judicial, está legitimado para interponer el recurso sólo el Defensor de Pueblo.

40. El Título I de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público lleva por rúbrica “Administración General del Estado” y:

- a) Establece que la Administración General del Estado comprende únicamente: a) La Organización Central, que integra los Ministerios y los servicios comunes y b) La Organización Territorial.
- b) Establece que los Ministros y los Secretarios Generales Técnicos en la organización central son órganos superiores.
- c) Establece que en la organización central son órganos directivos: 1.º Los Subsecretarios y Secretarios generales. 2.º Los Secretarios generales técnicos y Directores generales. 3.º Los Subdirectores generales.
- d) Establece que en la organización territorial de la Administración General del Estado son órganos directivos los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas pero no los Subdelegados del Gobierno en las provincias.

41. Sobre la organización territorial de la Administración General del Estado. Señale la respuesta correcta.

- a) La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público establece que en las Comunidades Autónomas uniprovinciales en las que no exista Subdelegado, el Delegado del Gobierno asumirá las competencias que la Ley atribuye a los Subdelegados del Gobierno en las provincias.
- b) Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público establece que en las Comunidades Autónomas uniprovinciales en las que no exista Delegado del Gobierno el Subdirector General asumirá las competencias que esta Ley atribuye a los Delegados del Gobierno en las provincias.
- c) La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público establece que no habrá Delegado del Gobierno ni Subdelegado del Gobierno en las Comunidades Autónomas uniprovinciales.
- d) La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público establece que en cada provincia y bajo la inmediata dependencia del Subdelegado del Gobierno existirá un Delegado del Gobierno.

42. El Título VII de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea lleva por rúbrica “Disposiciones Generales que rigen la interpretación y aplicación de la carta” y:

- a) No se contiene en el Título VII un artículo relativo a la prohibición de abuso de derecho.
- b) En el art. 51.1 se prevé expresamente que las disposiciones de la Carta están dirigidas a las instituciones, órganos y organismos de la Unión, dentro del respeto del principio de subsidiariedad, así como a los Estados miembros, en todo caso.
- c) En el art. 51.2 se establece que la Carta crea una misión nueva para la Unión y por su fuerza vinculante modifica las competencias y misiones definidas en los Tratados.
- d) En el artículo 51.1 se establece expresamente que las disposiciones de la Carta están dirigidas a las instituciones, órganos y organismos de la Unión, dentro del respeto del principio de subsidiariedad, así como a los Estados miembros únicamente cuando apliquen el Derecho de la Unión.

43. De conformidad con el art. 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea:

- a) A través de la cuestión prejudicial el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es competente para pronunciarse con carácter prejudicial sobre la interpretación de los Tratados y sobre la validez e interpretación de los actos adoptados por las instituciones, órganos u organismos de la Unión.
- b) Cuando ante un órgano jurisdiccional de un Estado miembro se plantee una cuestión sobre la interpretación de los Tratados dicho órgano podrá pedir al Tribunal de Justicia de la Unión que se pronuncie sobre la misma si estima necesaria una decisión al respecto para poder emitir su fallo y en ningún caso el art. 267 prevé que un órgano jurisdiccional nacional esté obligado a someter la cuestión al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
- c) Un órgano jurisdiccional de uno de los Estados miembros podrá pedir al Tribunal que se pronuncie sobre la interpretación de los Tratados siempre y no es necesario que estime que una decisión al respecto sea necesaria para poder emitir su fallo.
- d) Cuando se plantee una cuestión de este tipo en un asunto pendiente ante un órgano jurisdiccional nacional en relación con una persona privada de libertad, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronunciará siguiendo los trámites normales pues en el art. 267 no se especifica nada en relación a este supuesto.

44. Según la regulación que se contiene en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea sobre “ayudas otorgadas por los estados”:

- a) Serán incompatibles con el mercado interior las ayudas de carácter social concedidas a los consumidores individuales, siempre que se otorguen sin discriminaciones basadas en el origen de los productos.
- b) No podrán considerarse compatibles con el mercado interior las ayudas para fomentar la realización de un proyecto importante de interés común europeo o destinadas a poner remedio a una grave perturbación en la economía de un Estado miembro.
- c) Como regla general, serán incompatibles con el mercado interior, en la medida en que afecten a los intercambios comerciales entre Estados miembros, las ayudas otorgadas por los Estados o mediante fondos estatales, bajo cualquier forma, que falseen o amenacen falsear la competencia, favoreciendo a determinadas empresas o producciones.
- d) Ninguna institución de la Unión podrá examinar los regímenes de ayudas existentes en los Estados miembros pues corresponde al ámbito privado de cada Estado.

45. De acuerdo con la Constitución Española, si no hubiese a quien corresponda la Regencia, ésta será nombrada por:

- a) Las Cortes Generales.
- b) El Congreso de los Diputados.
- c) El Senado.
- d) El Gobierno.

46. De conformidad con la Constitución Española, una vez aprobado un proyecto de ley, ¿qué medida o medidas puede adoptar el Senado respecto del texto enviado por el Congreso?

- a) Aprobar el texto remitido por el Congreso en los mismos términos en que fue enviado por éste.
- b) Introducir enmiendas al texto aprobado por el Congreso.
- c) Interponer su veto.
- d) Todas las anteriores son correctas.

47. De acuerdo con la Constitución Española, la presentación de una cuestión de confianza ante el Congreso requiere:

- a) La presentación por al menos una décima parte de los Diputados.
- b) La inclusión de un candidato alternativo a la Presidencia del Gobierno.
- c) La deliberación previa del Consejo de Ministros.
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

48. Según la Ley Orgánica del Consejo de Estado:

- a) El Presidente del Consejo de Estado será nombrado libremente por Real Decreto acordado en Consejo de Ministros y refrendado por su Presidente, entre juristas de reconocida experiencia en asuntos de Estado.
- b) El Presidente del Consejo de Estado será nombrado libremente por Real Decreto acordado en Consejo de Ministros y refrendado por el Rey, entre juristas de reconocido prestigio y experiencia en asuntos de Estado.
- c) El Presidente del Consejo de Estado será nombrado libremente por Real Decreto acordado en Consejo de Ministros y refrendado por su Presidente, entre juristas de reconocido prestigio y experiencia en asuntos de Estado.
- d) El Presidente del Consejo de Estado será nombrado libremente por Real Decreto acordado en Consejo de Ministros y refrendado por el Presidente del Congreso, entre juristas de reconocido prestigio y experiencia en asuntos de Estado.

49. Los Consejeros Permanentes, en número igual al de las Secciones del Consejo de Estado, son nombrados, sin límite de tiempo, por Real Decreto entre personas que estén o hayan estado comprendidas en alguna de las categorías siguientes, señale la incorrecta:

- a) Académico de número de las Reales Academias integradas en el Instituto de España
- b) Funcionarios del Estado con diez años de servicios al menos en Cuerpos o Escalas para cuyo ingreso se exija título universitario.
- c) Oficial general de los Cuerpos Jurídicos de las Fuerzas Armadas
- d) Letrado Mayor del Consejo de Estado

50. Según la Constitución Española, el plazo de dos meses del que dispone el Senado, para vetar o enmendar los proyectos de ley se reducirá en los proyectos declarados urgentes por el Gobierno o por el Congreso de los Diputados a:

- a) Veinte días hábiles.
- b) Veinte días naturales.
- c) Quince días hábiles.
- d) Quince días naturales.

51. Según la Constitución española los Estatutos de autonomía deberán contener:

- a) El proceso de constitución histórica de la Comunidad correspondiente.
- b) La delimitación de su territorio.
- c) El funcionamiento de las instituciones autónomas propias.
- d) La remisión al artículo 149 de la Constitución española.

52. En la Constitución española se recoge determinados derechos fundamentales, según el mencionado texto:

- a) La libertad sindical es un derecho fundamental inherente a cualquier persona, no sujeto a límites o excepciones.
- b) Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza y toda educación será gratuita.
- c) Se prohíben los Tribunales de Honor en el ámbito de las organizaciones profesionales, pero se mantiene en la Administración civil con determinadas excepciones.
- d) En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará comunicación previa a la autoridad, que sólo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes

53. Según la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional:

- a) El Tribunal Constitucional solo actúa en Pleno y en Salas.
- b) El Tribunal Constitucional consta de tres Salas. Cada Sala está compuesta por cuatro Magistrados nombrados por el Tribunal en Pleno.
- c) Cuando una Sala considere necesario apartarse en cualquier punto de la doctrina constitucional precedente sentada por el Tribunal, la cuestión se someterá a la decisión del Pleno.
- d) Los miembros de la carrera judicial y, en general, los funcionarios públicos nombrados Magistrados y fiscales del Tribunal se mantendrán en situación de servicio activo en su puesto de origen.

54. Señala cuál de las siguientes no es una competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia:

- a) Ordenación del territorio y del litoral, urbanismo y vivienda.
- b) Régimen minero y energético.
- c) Ferias y mercados interiores.
- d) Organización, régimen jurídico y funcionamiento de sus instituciones de autogobierno.

55. Señala cuál de las siguientes es una competencia de ejecución de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia:

- a) Espectáculos públicos.
- b) Estadística para fines no estatales.
- c) Productos farmacéuticos.
- d) Artesanía.

56. La Asamblea Regional se reunirá en los siguientes períodos ordinarios de sesiones:

- a) El primero entre octubre y diciembre, y el segundo entre enero y junio.
- b) El primero entre septiembre y diciembre, y el segundo entre enero y junio.
- c) El primero entre septiembre y diciembre, y el segundo entre febrero y junio.
- d) El primero entre octubre y diciembre, y el segundo entre febrero y junio.

57. De conformidad con el Reglamento de la Asamblea Regional, el Pleno se entenderá válidamente constituido:

- a) Cuando concurran a la sesión la mitad más uno de sus miembros, incluido el Presidente o Presidenta y una Secretaria o Secretario de la Mesa
- b) Cuando concurran a la sesión la mitad más uno de sus miembros, debiendo estar presentes el Presidente o Presidenta de la Asamblea o quien reglamentariamente le sustituya y una Secretaria o Secretario de la Mesa.
- c) Cuando concurran a la sesión la mitad más uno de sus miembros, incluido el Presidente o Presidenta, un Vicepresidente y un Secretario
- d) Cuando concurran a la sesión la mitad más uno de sus miembros, incluido el Presidente o la Presidenta y los Secretarios de la Mesa

58. El acta de las sesiones del Pleno y de las Comisiones de la Asamblea Regional:

- a) Es redactada por el letrado correspondiente y autorizada por el Presidente
- b) Es redactada y autorizada por el letrado correspondiente, con el visto bueno del Presidente
- c) Es redactada y autorizada por el letrado correspondiente, con el visto bueno del Presidente y del Secretario respectivo.
- d) Es redactada por el Letrado y autorizada por el Secretario respectivo.

59. En relación con la delegación legislativa plena en Comisión regulada en el Reglamento de la Asamblea Regional indicar la solución incorrecta:

- a) Deberá hacerse para un concreto proyecto o proposición de Ley
- b) La propuesta de delegación deberá ser presentada dentro de los cinco días siguientes a la publicación del texto en el B.O.R.M.
- c) No podrán ser objeto de delegación los proyectos de ley de presupuestos generales de la CARM
- d) No podrán ser objeto de delegación los proyectos de reforma del Estatuto de Autonomía

60. Según la Ley 7/2004, de Organización y Régimen Jurídicos de la Administración Regional, los actos dictados por los Consejeros serán revisables de oficio por:

- a) El Consejo de Dirección.
- b) El Presidente de la Comunidad Autónoma.
- c) El Consejo de Gobierno.
- d) El propio Consejero.

61. Según la Ley 7/2004, de Organización y Régimen Jurídicos de la Administración Regional, la aprobación del plan inicial de actuación de un organismo autónomo regional corresponde a:

- a) Al titular de la Consejería de la que depende el organismo.
- b) El Consejo de Gobierno.
- c) La Consejería competente en materia de hacienda.
- d) La Asamblea Regional.

62. Según la Ley 7/2004, de Organización y Régimen Jurídicos de la Administración Regional, la superior autoridad sobre el personal de la Consejería corresponde a:

- a) El Consejo de Dirección.
- b) El Secretario General.
- c) El Consejero.
- d) Cada Director General respecto de su personal.

63. Según la Ley 7/2004, de Organización y Régimen Jurídicos de la Administración Regional, los representantes legales de los organismos públicos regionales son los órganos de contratación de los mismos, pero, ¿quién podrá fijar la cuantía a partir de la cual será necesaria su autorización para la celebración de contratos?:

- a) La Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma.
- b) El Consejero a que se halle adscrito.
- c) Su órgano colegiado superior.
- d) El Consejo de Gobierno.

64. Según la Ley 7/2004, de Organización y Régimen Jurídicos de la Administración Regional, la creación de un órgano colegiado interdepartamental, con competencias decisorias, cuyo Presidente tenga rango de Consejero, revestirá la forma de:

- a) Decreto del Presidente de la Comunidad Autónoma.
- b) Orden del Consejero tutelante.
- c) Orden conjunta de los Consejeros respectivos
- d) Decreto del Consejo de Gobierno.

65. Según la Ley 7/2004, de Organización y Régimen Jurídicos de la Administración Regional, cuando un Decreto fuera adoptado a propuesta de varias Consejerías, será firmado por:

- a) El Presidente y el Consejero de Presidencia.
- b) El Presidente.
- c) El Presidente y por el Secretario del Consejo de Gobierno.
- d) El Presidente y los Consejeros competentes por razón de la materia.

66. Según la Ley 6/2004, del Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno, la duración máxima de la suspensión provisional de funciones del Presidente es de:

- a) Tres meses
- b) Cuatro meses.
- c) Dos meses.
- d) Cinco meses.

67. Señale la afirmación correcta en relación con el Consejo Jurídico de la Región de Murcia:

- a) Los Consejeros, en número de 6, serán designados entre juristas de reconocido prestigio con al menos diez años de dedicación a la función o actividad profesional respectiva, que ostenten la condición política de murcianos.
- b) Los Consejeros, en número de 5, serán designados entre juristas de reconocido prestigio con al menos quince años de dedicación a la función o actividad profesional respectiva, que ostenten la condición política de murcianos.
- c) Los Consejeros, en número de 5, serán designados entre juristas de reconocido prestigio con al menos diez años de dedicación a la función o actividad profesional respectiva, que ostenten la condición política de murcianos.
- d) Los Consejeros, en número de 6, serán designados entre juristas de reconocido prestigio con al menos quince años de dedicación a la función o actividad profesional respectiva, que ostenten la condición política de murcianos.

68. La renovación de los Consejeros del Consejo Jurídico se producirá:

- a) Cada dos años, distribuyéndose los miembros a renovar por partes iguales entre los dos grupos de procedencia y dentro de cada grupo por turno.
- b) Cada tres años, distribuyéndose los miembros a renovar por partes iguales entre los dos turnos de procedencia y dentro de cada turno por grupo.
- c) Cada dos años, distribuyéndose los miembros a renovar por partes iguales entre los dos turnos de procedencia y dentro de cada turno por grupo.
- d) Cada tres años, distribuyéndose los miembros a renovar por partes iguales entre los dos grupos de procedencia y dentro de cada grupo por turno.

69. El Consejo Económico y Social es:

- a) Es un órgano colegiado de carácter consultivo de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en materia socio-económica y laboral.
- b) Es un órgano colegiado de carácter consultivo de la Administración de la Región de Murcia, en materia socio-económica y laboral.
- c) Es un órgano colegiado de carácter consultivo de la Asamblea de la Región de Murcia, en materia socio-económica y laboral.
- d) Es un órgano colegiado de carácter consultivo del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia, en materia socio-económica y laboral.

70. Sobre el ámbito de aplicación de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

- a) Es una ley que tiene objeto regular los requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos, el procedimiento administrativo común a todas las Administraciones Públicas excepto el sancionador y el de reclamación de responsabilidad de las Administraciones Públicas, así como los principios a los que se ha de ajustar el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria.
- b) Las actuaciones y procedimientos en materia de extranjería se regirán por su normativa específica y no regirá supletoriamente la Ley 39/2015.
- c) Es una ley que tiene por objeto regular los requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos, el procedimiento administrativo común a todas las Administraciones Públicas, incluyendo el sancionador y el de reclamación de responsabilidad de las Administraciones Públicas, así como los principios a los que se ha de ajustar el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria.
- d) Las actuaciones y procedimientos de aplicación de los tributos en materia tributaria se rigen por las disposiciones comunes de la Ley 39/2015 dado que carecen de una normativa específica.

71. Sobre la nulidad de pleno derecho. De conformidad con el art. 47 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los actos de las Administraciones Públicas son nulos de pleno derecho en el siguiente caso:

- a) Los dictados por órgano no competente por razón de la jerarquía.
- b) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados.
- c) Los actos que vulneren las leyes.
- d) Los actos que lesionen cualquier derecho reconocido en la Constitución Española.

72. De conformidad la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

- a) La Convalidación de actos viciados está prevista para aquellos supuestos en los que un acto nulo o anulable que contenga elementos constitutivos de otro distinto pueda producir los efectos de ese otro acto.
- b) La Convalidación es un mecanismo a través del cual la Administración podrá convalidar los actos nulos de pleno derecho subsanando los vicios de los que adolezcan.
- c) A través del mecanismo de la conservación de actos y trámites, regulado en el art. 51, el órgano que declare la nulidad o anule las actuaciones dispondrá siempre la conservación de aquellos actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse cometido la infracción.
- d) Es posible que la Administración convalide un acto, subsanando los vicios de que adolezca, con independencia de que se trate de un vicio de nulidad de pleno derecho o de anulabilidad.

73. Sobre las exigencias de motivación de los actos administrativos prevista en el art. 35 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

- a) La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas establece que serán motivados los actos que se dicten en el ejercicio de potestades no discrecionales.
- b) La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas establece que serán motivados los actos que se pronuncien sobre la admisión de pruebas propuestas por los interesados.
- c) La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas establece que serán motivadas las propuestas de resolución en los procedimientos de carácter sancionador, así como los actos que resuelvan procedimientos de carácter sancionador o de responsabilidad patrimonial.
- d) La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas establece que serán motivados los actos que resuelvan procedimientos de revisión de oficio de disposiciones generales pero no es necesaria la motivación del acto que resuelve procedimientos de revisión de oficio de actos administrativos.

74. Sobre el sistema de notificaciones previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

- a) La ley establece que todas las notificaciones se practicarán por medios electrónicos sin excepción.
- b) Los interesados que estén obligados a recibir notificaciones por vía electrónica podrán comunicar a la Administración Pública, en cualquier momento, que las notificaciones sucesivas se practiquen en papel en su domicilio.
- c) Las personas jurídicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no y el medio elegido por la persona jurídica para comunicarse con las Administraciones Públicas podrá ser modificado por aquella en cualquier momento.
- d) Las personas físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas. En todo caso, estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo las personas jurídicas.

75. Sobre el silencio administrativo, de conformidad con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

- a) El sentido del silencio será estimatorio en todos los procedimientos iniciados a solicitud del interesado como, por ejemplo, en los procedimientos de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas.
- b) En los procedimientos iniciados de oficio en que la Administración ejercite potestades sancionadoras, el vencimiento del plazo máximo establecido sin que se haya dictado y notificado resolución expresa tendrá como efecto que se producirá la caducidad del procedimiento.
- c) En los casos en los que se entiende estimada o desestimada una solicitud por silencio administrativo, la resolución expresa posterior al vencimiento del plazo se adoptará por la Administración sin vinculación alguna al sentido del silencio.
- d) La existencia de los actos administrativos producidos por silencio administrativo debe acreditarse mediante un certificado acreditativo del silencio producido, que se expedirá de oficio por el órgano competente para resolver o que el interesado podrá pedir en cualquier momento, no siendo válidos otros medios de prueba.

76. Sobre el silencio administrativo, de conformidad con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

- a) En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, el sentido del silencio será desestimatorio en aquellos procedimientos cuya estimación tuviera como consecuencia que se transfirieran al solicitante o a terceros facultades relativas al dominio público.
- b) El sentido del silencio será desestimatorio en los procedimientos de impugnación de actos y disposiciones. No obstante, cuando el recurso de alzada se haya interpuesto contra la desestimación por silencio administrativo de una solicitud por el transcurso del plazo, se entenderá estimado el mismo si, llegado el plazo de resolución, el órgano administrativo competente no dictase y notificase resolución expresa, en todas las materias.
- c) En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, rige el silencio positivo en los procedimientos relativos al ejercicio del derecho de petición, a que se refiere el artículo 29 de la Constitución.
- d) En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, rige el silencio positivo en los procedimientos de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas.

77. Sobre el expediente administrativo; la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas establece que:

- a) Se entiende por expediente administrativo el conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a la resolución administrativa, así como las diligencias encaminadas a ejecutarla, formando parte del expediente administrativo las notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos o entre órganos, en todo caso.
- b) Los expedientes tendrán formato electrónico y se formarán mediante la agregación ordenada de cuantos documentos, pruebas, dictámenes, informes, acuerdos, notificaciones y demás diligencias deban integrarlos, así como un índice numerado de todos los documentos que contenga cuando se remita. Asimismo, deberá constar en el expediente copia electrónica certificada de la resolución adoptada.
- c) No formará parte del expediente administrativo los informes, preceptivos y facultativos, solicitados antes de la resolución administrativa que ponga fin al procedimiento.
- d) Cuando en virtud de una norma sea preciso remitir el expediente electrónico, se hará de acuerdo con lo previsto en el Esquema Nacional de Interoperabilidad y en las correspondientes Normas Técnicas de Interoperabilidad, y, en este caso, no será necesario acompañar un índice autenticado de los documentos que contenga.

78. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas sobre el trámite de audiencia establece:

- a) Que los procedimientos, una vez instruidos e inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, se pondrán de manifiesto a los interesados o, en su caso, a sus representantes. Y que la audiencia a los interesados será anterior a la solicitud del informe del órgano competente para el asesoramiento jurídico o a la solicitud del Dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, en el caso que éstos formaran parte del procedimiento.
- b) Que no se podrá prescindir, en ningún caso, del trámite de audiencia.
- c) Que en el trámite de audiencia los interesados sólo podrán alegar, pero no podrán presentar documentos ni justificaciones, aún cuando estimen que son pertinentes.
- d) Que en los procedimientos de responsabilidad patrimonial que se tramiten para determinar la responsabilidad de las Administraciones Públicas por los daños y perjuicios causados a terceros durante la ejecución de contratos, cuando sean consecuencia de una orden inmediata y directa de la Administración o de los vicios del proyecto elaborado por ella misma, será necesario dar audiencia a los terceros pero no será necesario dar audiencia al contratista.

79. Sobre los recursos administrativos, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas establece que:

- a) El recurso de alzada podrá interponerse ante el órgano que dictó el acto que se impugna o ante el competente para resolverlo y el plazo para la interposición de la alzada será de un mes, si el acto fuera expreso. Transcurrido dicho plazo sin haberse interpuesto el recurso, la resolución será firme a todos los efectos. Si el acto no fuera expreso el solicitante y otros posibles interesados podrán interponer recurso de alzada en cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzcan los efectos del silencio administrativo.
- b) En el recurso de alzada, el plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de un mes. Transcurrido este plazo sin que recaiga resolución, se podrá entender desestimado el recurso.
- c) Los actos administrativos que no pongan fin a la vía administrativa podrán ser recurridos potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los hubiera dictado o ser impugnados directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
- d) El “recurso extraordinario de revisión” es un procedimiento a través del cual las Administraciones Públicas, en cualquier momento, por iniciativa propia o a solicitud de interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere, declararán de oficio la nulidad de los actos administrativos que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, en los supuestos previstos en el artículo 47.1.

80. En materia de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas:

- a) La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público regula el procedimiento de responsabilidad patrimonial estableciendo que el derecho a reclamar prescribirá al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo.
- b) La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público establece que la responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento de la Administración de Justicia se regirá por la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
- c) La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, sobre la indemnización, establece que obligatoriamente en los casos de muerte o lesiones corporales se deberá aplicar la valoración incluida en los baremos de la normativa vigente en materia de Seguros obligatorios y de la Seguridad Social.
- d) La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, sobre la indemnización, establece que la indemnización procedente no podrá sustituirse por una compensación en especie en ningún caso.

81. Sobre el reintegro de subvenciones, señale la respuesta correcta.

- a) De conformidad con lo dispuesto en el art. 38.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de derecho público, resultando de aplicación para su cobranza lo previsto en la Ley General Presupuestaria.
- b) De conformidad con lo dispuesto en el art. 38.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, los procedimientos para la exigencia del reintegro de las subvenciones tendrán siempre carácter civil y no tendrán carácter administrativo.
- c) La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones sobre el destino de los reintegros de los fondos de la Unión Europea prevé que tendrá el tratamiento que en su caso determine la normativa nacional de cada país.
- d) En el art. 38 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones se regula la naturaleza de los créditos a reintegrar pero no se especifica que los procedimientos para la exigencia del reintegro de subvenciones tienen carácter administrativo siempre.

82. La Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre expropiación forzosa regula en el artículo 52:

- a) La expropiación urgente que se caracteriza porque se difiere a un momento final la tramitación del expediente de justo precio de forma que, una vez efectuada la ocupación, se tramitará el expediente de expropiación en sus fases de justiprecio y pago.
- b) El instituto jurídico de la “reversión de bienes expropiados” en virtud de la cual el primitivo dueño puede recobrar la finca sin obligación de abonar a quien fuera su titular una indemnización.
- c) La expropiación urgente, que es una modalidad de expropiación en virtud de la cual la Administración puede proceder a la privación de bienes sin necesidad de pago de un justiprecio.
- d) El plazo para el ejercicio del derecho de reversión.

83. De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo 1/2001, de 26 de enero, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de la Función Pública de la Región de Murcia:

- a) Se Integran la Función Pública Regional: a) Los funcionarios propios de la Administración Pública de la Región de Murcia. b) El personal laboral. c) El personal interino. d) El personal eventual. e) El personal estatutario del Servicio Murciano de Salud. f) El personal que presta servicios en la Asamblea Regional.
- b) Se Integran la Función Pública Regional: a) Los funcionarios propios de la Administración Pública de la Región de Murcia. b) El personal laboral. c) El personal interino. d) El personal eventual. e) El personal estatutario del Servicio Murciano de Salud. f) El personal que presta servicios en la Asamblea Regional. g) El personal de las Corporaciones Locales de la Región de Murcia.
- c) Se Integran la Función Pública Regional: a) Los funcionarios propios de la Administración Pública de la Región de Murcia. b) El personal laboral. c) El personal interino. d) El personal eventual. e) El personal estatutario del Servicio Murciano de Salud.
- d) Se Integran la Función Pública Regional únicamente: a) Los funcionarios propios de la Administración Pública de la Región de Murcia. b) El personal interino. c) El personal eventual.

84. Atendiendo a la delimitación de los tipos contractuales regulada en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014:

- a) La ley prohíbe los contratos mixtos estableciendo que no podrá un contrato comprender prestaciones propias de dos o más contratos de obras, suministros o servicios
- b) La concesión de obra es un contrato que tiene por objeto uno de los siguientes: a) La ejecución de una obra, aislada o conjuntamente con la redacción del proyecto, o la realización de alguno de los trabajos enumerados en el Anexo I de la Ley. b) La realización, por cualquier medio, de una obra que cumpla los requisitos fijados por la entidad del sector público contratante que ejerza una influencia decisiva en el tipo o el proyecto de la obra. E incluidas las obras de restauración y reparación de construcciones existentes, así como la conservación y mantenimiento de los elementos construidos. Y en el que la contraprestación a favor del concesionario consiste, o bien únicamente en el derecho a explotar la obra o bien en dicho derecho acompañado del de percibir un precio.
- c) El contrato de concesión de obras aquel que tiene por objeto la ejecución de una obra, aislada o conjuntamente con la redacción del proyecto, o la realización de alguno de los trabajos enumerados en el Anexo I o la realización, por cualquier medio, de una obra que cumpla los requisitos fijados por la entidad del sector público contratante que ejerza una influencia decisiva en el tipo o el proyecto de la obra. Y la contraprestación a favor del concesionario no incluye en ningún caso el derecho a explotar la obra.
- d) La característica esencial del contrato de servicios es que el concesionario recibe como contrapartida el derecho a explotar los servicios o bien dicho derecho acompañado del de percibir un precio.

85. Mediante la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público:

- a) Se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2014/25/UE, de 26 de febrero de 2014, relativa a la contratación por entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales.
- b) Se incorporan al ordenamiento jurídico español tres Directivas: las Directivas 2014/23/UE, de 26 de febrero de 2014, relativa a la adjudicación de contratos de concesión, la Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública, y la Directiva 2014/25/UE, de 26 de febrero de 2014, relativa a la contratación por entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales.
- c) Se incorporan al ordenamiento jurídico español las Directivas 2014/23/UE, de 26 de febrero de 2014, relativa a la adjudicación de contratos de concesión y la Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública, dejando la transposición de la Directiva 2014/25/UE, de 26 de febrero de 2014, relativa a la contratación por entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales a otra ley específica, que asimismo incorporará al ordenamiento jurídico español la parte de la Directiva 2014/23/UE que resulte de aplicación a los sectores citados.
- d) Se incorpora al ordenamiento jurídico español tan sólo la Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública.

86. La Ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia dedica el Título V al “Régimen urbanístico del suelo” y:

- a) Establece que el Plan General Municipal de Ordenación clasificará el territorio municipal en urbanizable y no urbanizable.
- b) Establece que el Plan General Municipal de Ordenación clasificará el territorio municipal en suelo urbano, no urbanizable y urbanizable.
- c) Establece que constituirán suelo no urbanizable las áreas ya transformadas que dispongan de acceso rodado y servicios de abastecimiento y evacuación de aguas y que estén consolidadas por la edificación en cuantía superior a las dos terceras partes de la superficie apta para la misma.
- d) Establece que es el Plan General Municipal de Ordenación clasificará el territorio municipal en suelo rústico y urbano.

87. La Ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia sobre la “Competencia para la aprobación de los planes” en el art. 154:

- a) Establece que corresponderá a la Administración regional la aprobación definitiva de los siguientes instrumentos: a) Planes Generales Municipales de Ordenación, sus revisiones y adaptaciones. b) Modificaciones estructurales de los Planes Generales Municipales de Ordenación c) Modificaciones de planeamiento o planeamiento de desarrollo que conlleven alteración o uso urbanístico diferente de espacios libres públicos y zonas verdes vigentes, calificados como sistema general. d) Instrumentos de planeamiento que afecten a más de un municipio. e) Instrumentos de planeamiento tramitados por la Administración regional.
- b) Establece que corresponderá a la Administración regional la aprobación provisional del Plan General Municipal de Ordenación con las modificaciones que procedieran de forma que el plan aprobado provisionalmente y el estudio ambiental estratégico se remitirán al órgano ambiental para la formulación de la declaración ambiental estratégica.
- c) Establece que corresponderá al ayuntamiento, con independencia de la tramitación ambiental que proceda, la aprobación definitiva de los Planes Generales Municipales de Ordenación.
- d) Establece que con carácter general corresponderá a la Administración Regional la aprobación definitiva de los Estudios de Detalle.

88. ¿Qué ley tiene por objeto establecer el marco normativo y los principios que han de regir la actuación de los poderes públicos en aras a la realización efectiva del derecho de acceso de todos los ciudadanos al uso y disfrute de una vivienda digna y adecuada en el ámbito territorial de la Región de Murcia atendiendo especialmente a los sectores de población más vulnerables. Así como luchar contra todas las formas de ocupación de la propiedad privada en la medida en que lo permite el marco competencial autonómico, conforme a lo establecido en el ordenamiento jurídico español?

- a) La Ley 6/2015, de 24 de marzo, de Vivienda y Lucha contra la Ocupación de la Región de Murcia.
- b) La Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda.
- c) El Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.
- d) La Ley 1/2010, de 8 de marzo, Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía.

89. De conformidad con la regulación contenida en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias:

- a) Las vías pecuarias son bienes de dominio público del Estado y, en consecuencia, inalienables, imprescriptibles e inembargables.
- b) Las vías pecuarias se denominan, con carácter general: cañadas, cordeles y veredas.
- c) La creación, ampliación y restablecimiento de las vías pecuarias corresponde a los municipios en sus respectivos ámbitos territoriales. Dichas actuaciones llevan aparejadas la declaración de utilidad pública a efectos expropiatorios de los bienes y derechos afectados.
- d) La Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias establece que corresponde al Estado el derecho y el deber de investigar la situación de los terrenos que se presuman pertenecientes a las vías pecuarias.

90. Según la Ley de Contratos del Sector Público, son contratos sujetos a regulación armonizada:

- a) Aquellos cuyo objeto principal sea permitir a los órganos de contratación la puesta a disposición o la explotación de redes públicas de comunicaciones o la prestación al público de uno o varios servicios de comunicaciones electrónicas.
- b) Los contratos de obras, de concesión de obras y de concesión de servicios cuyo valor estimado sea igual o superior a 5.538.000 euros.
- c) Los contratos de concesión adjudicados para el suministro de agua potable a dichas redes.
- d) Los igual o superior a 135.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro adjudicados por la Administración General del Estado, sus Organismos Autónomos, o las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social.

91. Según la Ley 4/1994, de 26 de julio, de Salud de la Región de Murcia se configura el Plan de Salud como:

- a) El Plan de Salud constituirá la expresión de la política de salud a desarrollar por las administraciones públicas en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
- b) El Plan de Salud tendrá como fines la ejecución de las competencias de administración y gestión de servicios, prestaciones y programas sanitarios que le atribuya la Administración de la Comunidad Autónoma.
- c) El Plan de Salud constituirá la expresión de la voluntad popular de garantizar la salud y será ejecutado por el Servicio Murciano de Salud.
- d) El Plan de Salud tendrá como fines la ejecución de las competencias de distribución y eficacia de los recursos económicos y administrativos en todos los campos de la salud que le atribuya la Administración de la Comunidad Autónoma.

92. De conformidad con la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria:

- a) Los impuestos se caracterizan porque el hecho imponible consiste en la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público.
- b) Las contribuciones especiales son un impuesto cuyo hecho imponible consiste en la obtención por el obligado tributario de un beneficio o de un aumento de valor de sus bienes como consecuencia de la realización de obras públicas o del establecimiento o ampliación de servicios públicos.
- c) Los tributos son medios para obtener los recursos necesarios para el sostenimiento de los gastos públicos y no podrán servir como instrumentos de la política económica general.
- d) Los tributos se clasifican en: tasas, contribuciones especiales e impuestos.

93. La Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria define las exenciones como:

- a) Los supuestos en que, a pesar de realizarse el hecho imponible, la ley exime del cumplimiento de la obligación tributaria principal.
- b) Los supuestos en que no hay realización del hecho imponible.
- c) Los supuestos en que se producen prestaciones accesorias que deben satisfacer los obligados tributarios como consecuencia de la presentación de autoliquidaciones o declaraciones fuera de plazo sin requerimiento previo de la Administración tributaria.
- d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.

94. Salvo lo establecido por leyes especiales, según la Ley de Hacienda de la Región de Murcia, la prescripción de las obligaciones de la Hacienda Pública Regional

- a) Prescribirá a los cinco años el derecho al reconocimiento o liquidación por la Hacienda Pública Regional de toda obligación que no se hubiese solicitado con la presentación de los documentos justificativos. El plazo se contará desde la fecha en que se inició el servicio o la prestación determinante de la obligación.
- b) Prescribirá a los cinco años el derecho a exigir el pago de las obligaciones ya reconocidas o liquidadas, si no fuese reclamado por los acreedores legítimos o sus derechohabientes. El plazo se contará desde la fecha de notificación del reconocimiento o liquidación de la respectiva obligación.
- c) Prescribirá a los cinco años el derecho a la devolución de ingresos indebidos y, en su caso, a los intereses correspondientes. El plazo se contará desde la fecha en que dicho ingreso hubiera sido realizado.
- d) Todas son correctas.

95. En el caso de deudas tributarias resultantes de liquidaciones practicadas por la Administración, según la Ley General Tributaria, el pago en período voluntario deberá hacerse en los siguientes plazos,

- a) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días uno y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 15 del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
- b) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el primer día del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
- c) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días uno y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
- d) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el segundo día del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

96. El Código Penal recoge en su articulado el error de tipo y el error de prohibición en los siguientes términos:

- a) El error invencible sobre un hecho constitutivo de la infracción penal no excluye la responsabilidad criminal.
- b) Si el error, atendidas las circunstancias del hecho y las personales del autor, fuera vencible, excluye la responsabilidad criminal.
- c) El error invencible sobre la ilicitud del hecho constitutivo de la infracción penal excluye la responsabilidad criminal.
- d) Todas son incorrectas.

97. Según el Código Penal son circunstancias atenuantes

- a) La de obrar por causas o estímulos tan poderosos que hayan producido arrebató, obcecación u otro estado transitorio impeditivo o invalidante.
- b) La de haber procedido el culpable, tras conocer que el procedimiento judicial se dirige contra él, a confesar la infracción a las autoridades.
- c) La dilación extraordinaria e indebida en la tramitación del procedimiento, siempre que no sea atribuible al propio inculpado y que no guarde proporción con la complejidad de la causa.
- d) Todas son correctas.

98. Según el Código Penal son penas graves

- a) Las inhabilitaciones especiales hasta cinco años.
- b) La prisión superior a cinco años.
- c) La suspensión de empleo o cargo público hasta cinco años.
- d) La privación del derecho a la tenencia y porte de armas de un año y un día a ocho años.

99. En las reglas generales de aplicación de las penas el Código Penal establece

- a) A los autores de tentativa de delito se les impondrá la pena inferior en dos o tres grados a la señalada por la Ley para el delito consumado, en la extensión que se estime adecuada, atendiendo al peligro inherente al intento y al grado de ejecución alcanzado.
- b) Las circunstancias agravantes o atenuantes que consistan en cualquier causa de naturaleza personal agravarán o atenuarán la responsabilidad sólo de aquéllos en quienes concurran.
- c) En los delitos leves y en los delitos imprudentes, los jueces o tribunales aplicarán las penas según las reglas generales establecidas en el Código Penal.
- d) Todas son correctas.

100. Según el Código Penal, y en cuanto a los delitos contra la Hacienda Pública

- a) Cuando la Administración Tributaria apreciare indicios de haberse cometido un delito contra la Hacienda Pública, podrá liquidar de forma separada, por una parte los conceptos y cuantías que no se encuentren vinculados con el posible delito contra la Hacienda Pública, y por otra, los que se encuentren vinculados con el posible delito contra la Hacienda Pública.
- b) La existencia del procedimiento penal por delito contra la Hacienda Pública paralizará la acción de cobro de la deuda tributaria.
- c) Por parte de la Administración Tributaria no podrá iniciarse las actuaciones dirigidas al cobro, a no ser que se haya prestado la correspondiente garantía ante el Juez que conozca del procedimiento.
- d) Los Jueces y Tribunales podrán imponer al obligado tributario o al autor del delito la pena inferior en dos o tres grados, siempre que, antes de que transcurran dos meses desde la citación judicial como imputado satisfaga la deuda tributaria y reconozca judicialmente los hechos.

SUPUESTO PRÁCTICO 1

El Sr. Florencio el día 10 de enero del año XXX participó en una batida de jabalí y zorro en un coto de caza sito en la Región de Murcia.

La batida se organizó por una Sociedad de Cazadores.

Para participar en la batida D. Florencio debía presentar una solicitud y pagar la cantidad estipulada.

Una vez inscrito, la Sociedad realizó un sorteo y distribuyó los puestos de caza entre los participantes e indicó a D. Florencio el puesto de caza en el que debía situarse durante la batida.

El día de la celebración de la batida se presentaron dos agentes medio ambientales y procedieron a redactar un boletín de denuncia en el que hacían constar que D. Florencio se encontraba cazando en un terreno no cinegético.

El órgano competente de la Consejería de Medio Ambiente de la Región de Murcia incoó el procedimiento sancionador.

Se dictó primero la Resolución del Director General de Desarrollo Rural y Forestal de la Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia que sancionó a D. Florencio por cometer la infracción consistente en practicar la caza del jabalí y zorro en terreno prohibido de conformidad con el art. 22 y los arts. 99 y ss de la 7/2003, de 12 de noviembre, de Caza y Pesca Fluvial de la Región de Murcia. Se impuso la sanción de multa de 300 euros y la pérdida de la licencia de caza e inhabilitación para obtenerla durante el periodo de un año. En esta Resolución se indicaba que frente a la misma se podría interponer recurso de alzada.

D. Florencio interpuso recurso de alzada frente a la Resolución del Director General.

Por Orden de la Consejera de Agricultura, Agua y Medio Ambiente de la CARM se desestimó el recurso de alzada interpuesto contra la resolución de la Dirección General de Desarrollo Rural y Forestal y se confirmó la sanción.

D. Florencio no estaba conforme con la sanción y decidió interponer recurso contencioso administrativo.

101. En el caso analizado se ejerce una potestad sancionadora por la Administración. Señale la respuesta correcta:

- a) La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público establece y regula el procedimiento sancionador.
- b) La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público establece y regula los principios de la potestad sancionadora y la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas regula el procedimiento administrativo común y las especialidades aplicables al procedimiento sancionador.
- c) La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas no se aplica a las Administraciones de las Comunidades Autónomas.
- d) La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas define el principio de tipicidad señalando que sólo constituyen infracciones administrativas las vulneraciones del ordenamiento jurídico previstas como tales infracciones por una Ley.

102. Señale cuál de las siguientes afirmaciones es correcta, sobre el contenido que debió tener el acuerdo de inicio dictado en este procedimiento sancionador:

- a) En el acuerdo de iniciación se indicará la Identificación del instructor y, en su caso, Secretario del procedimiento, con expresa indicación del régimen de recusación de los mismos.
- b) El acuerdo de iniciación deberá contener de forma motivada los hechos que se consideren probados y su exacta calificación jurídica.
- c) El acuerdo de iniciación deberá indicar la valoración de las pruebas practicadas.
- d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.

103. Sobre los Principios de la potestad sancionadora regulados en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público:

- a) El art. 28 se refiere al principio de responsabilidad en materia sancionadora señalando que sólo constituyen infracciones administrativas las vulneraciones del ordenamiento jurídico previstas como tales infracciones por una Ley.
- b) El art. 28 se refiere al principio de responsabilidad señalando que sólo podrán ser sancionadas por hechos constitutivos de infracción administrativa las personas físicas y jurídicas, así como, cuando una Ley les reconozca capacidad de obrar, los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos, que resulten responsables de los mismos a título de dolo o culpa.
- c) El art. 28 se refiere al principio de irretroactividad señalando que sólo constituyen infracciones administrativas las vulneraciones del ordenamiento jurídico previstas como tales infracciones por una Ley.
- d) El art. 28 se refiere al principio de responsabilidad al señalar que las normas definidoras de infracciones y sanciones no serán susceptibles de aplicación analógica.

104. Sobre la resolución sancionadora. En el caso de que el órgano competente para resolver (el Director General de Desarrollo Rural y Forestal de la Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma) considere que la infracción reviste mayor gravedad que la determinada en la propuesta de resolución:

- a) Se notificará al Sr. Florencio para que aporte cuantas alegaciones estime convenientes en el plazo de quince días.
- b) No es posible que el órgano competente para resolver aprecie que la infracción o la sanción revisten mayor gravedad que la determinada en la propuesta, en ningún caso.
- c) Se dictará la resolución, sin notificación al inculpado, acordando que la infracción reviste mayor gravedad que la determinada en la propuesta de resolución y frente a la resolución sancionadora podrá el interesado interponer los recursos procedentes en vía administrativa o jurisdiccional.
- d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.

105. Al Sr. Florencio se le notificó la Resolución del Director General de Desarrollo Rural y Forestal el día 1 de marzo de xxx. En la resolución se indicaba: la decisión motivada y que contra la misma podría interponerse recurso de alzada -sin más precisiones-. ¿Considera que la misma cumplía los requisitos establecidos en la Ley 39/2015?.

- a) Sí. La decisión, que debe ser motivada, es lo esencial y el resto de cuestiones son accesorias y no es necesario incluirlas en la resolución sancionadora.
- b) No. Además de la decisión, la resolución sancionadora debe contener la indicación de los recursos que contra la misma procedan, órgano administrativo o judicial ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno. Y, además, dado que se trata de una resolución en un procedimiento sancionador, la resolución incluirá la valoración de las pruebas practicadas, en especial aquellas que constituyan los fundamentos básicos de la decisión, fijarán los hechos y, en su caso, la persona o personas responsables, la infracción o infracciones cometidas y la sanción o sanciones que se imponen, o bien la declaración de no existencia de infracción o responsabilidad.
- c) Sí. No es necesario hacer referencia a la valoración de las pruebas practicadas.
- d) Sí. La resolución, en este supuesto, debió limitarse a determinar la decisión con indicación de la sanción que se imponía sin más datos.

106. Al Sr. Florencio se le notificó la Resolución del Director General de Desarrollo Rural y frente a la misma interpuso recurso de alzada. Sobre los plazos para la interposición del recurso de alzada. Señale la respuesta correcta:

- a) El Sr. Florencio dispone del plazo de un mes para la interposición del recurso de alzada.
- b) El Sr. Florencio dispone del plazo de cinco meses para la interposición del recurso de alzada.
- c) El Sr. Florencio dispone del plazo de tres meses para la interposición del recurso de alzada.
- d) El Sr. Florencio dispone del plazo de dos días para la interposición del recurso de alzada.

107. Sobre el cómputo de los plazos. Señale la respuesta correcta:

- a) El plazo para la interposición del recurso de alzada es un plazo expresado en la Ley 39/2015 por días y, por lo tanto, se entiende que los días son hábiles y se incluye en el cómputo los sábados, domingos y festivos.
- b) El plazo para la interposición del recurso de alzada es un plazo expresado en la Ley 39/2015 en meses y, por lo tanto, se trata de un plazo que concluirá el mismo día en que se produjo la notificación, publicación o silencio administrativo en el mes o el año de vencimiento. Si en el mes de vencimiento no hubiera día equivalente a aquel en que comienza el cómputo, se entenderá que el plazo expira el último día del mes.
- c) El plazo para la interposición del recurso de alzada es un plazo expresado en la Ley 40/2015 en días.
- d) La Ley 39/2015 no prevé un plazo para la interposición del recurso de alzada.

108. Por Orden de la Consejera de Agricultura, Agua y Medio Ambiente de la CARM se desestimó el recurso de alzada interpuesto contra la resolución de la Dirección General de Desarrollo Rural y Forestal y se confirmó la sanción. Imagine que se le notificó la Orden de la Consejería el día 2 de junio del año xxxx; ¿cuándo finaliza el plazo para interponer el recurso contencioso administrativo? (tenga en consideración que se trata de fechas ficticias; imagine que el día de inicio y el día de fin de plazo son hábiles).

- a) El Sr. Florencio tiene de plazo para interponer el recurso contencioso administrativo hasta el día 2 de agosto de xxxx a las 15 horas.
- b) El Sr. Florencio tiene de plazo para interponer el recurso contencioso administrativo hasta el día 2 de julio de xxxx a las 15 horas.
- c) El Sr. Florencio tiene de plazo para interponer el recurso contencioso administrativo hasta el día 1 de septiembre de xxxx a las 15 horas.
- d) El Sr. Florencio tiene de plazo para interponer el recurso contencioso administrativo hasta el día 3 de septiembre de xxxx a las 15 horas.

109. Sobre la determinación de la competencia objetiva en este supuesto: ¿A qué Juzgados o Tribunales del orden jurisdiccional contencioso administrativo le correspondería el conocimiento del recurso contencioso administrativo interpuesto?

- a) A los Juzgados de lo Contencioso-administrativo.
- b) A los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo.
- c) A la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional.
- d) A las Salas de lo Contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia.

110. De conformidad con lo dispuesto en el art. 23 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. ¿Para interponer recurso contencioso administrativo D. Florencio debe conferir su representación a un Procurador y ser asistido por Abogado?

- a) Sí, porque se trata de una actuación ante un órgano colegiado.
- b) No, porque se trata de una actuación ante un órgano unipersonal y, en ese caso, las partes podrán conferir su representación a un Procurador y serán asistidas, en todo caso, por Abogado.
- c) Puede comparecer por sí mismo.
- d) D. Florencio puede decidir estar asistido por un Procurador.

111. De conformidad con lo dispuesto en el art. 24 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa; sobre la representación y defensa de la Administración Pública:

- a) El art. 24 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa no refiere nada sobre las reglas de representación y defensa de las Administraciones Públicas.
- b) El art. 24 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa dispone que la representación y defensa de las Administraciones públicas y de los órganos constitucionales se rige por lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial y en la Ley de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas, así como en las normas que sobre la materia y en el marco de sus competencias hayan dictado las Comunidades Autónomas.
- c) La representación y defensa de las Administraciones públicas y de los órganos constitucionales se rige por lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
- d) En el art. 24 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa sólo se hace referencia a la la Ley de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas pero no se hace referencia a las normas que sobre la materia relativa a la representación y defensa de la Administración autonómica hayan dictado las Comunidades Autónomas.

112. Sobre el procedimiento contencioso administrativo. En el supuesto de que el recurso contencioso administrativo se debiera tramitar por las normas del procedimiento denominado en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa “procedimiento en primera o única instancia” (procedimiento ordinario) ¿En qué momento se entiende producido el emplazamiento a la Administración?

- a) El emplazamiento de la Administración se entenderá efectuado por la reclamación del expediente.
- b) El emplazamiento de la Administración se entenderá efectuado cuando la Administración remite el expediente administrativo.
- c) El emplazamiento de la Administración se entenderá efectuado cuando la Administración presenta la contestación a la demanda.
- d) El emplazamiento de la Administración se entenderá efectuado en el momento en el que se cite a la Administración para el acto de práctica de pruebas.

113. Sobre el procedimiento contencioso administrativo. En el supuesto de que el recurso contencioso administrativo se debiera tramitar por las normas del procedimiento denominado en la Ley 29/ 1998 “procedimiento en primera o única instancia” (procedimiento ordinario) ¿En qué momento se entiende personada la Administración?

- a) Las Administraciones públicas se entenderán personadas por el envío del expediente.
- b) Las Administraciones públicas se entenderán personadas por el envío de la contestación a la demanda.
- c) Las Administraciones públicas se entenderán personadas desde el momento en el que se acuerde por Auto motivado del Tribunal.
- d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.

114. Una vez recibido el expediente administrativo en el Juzgado o Tribunal, el Letrado de la Administración de Justicia acordó que se entregara al recurrente para deducir la demanda. ¿De qué plazo dispone la defensa del Sr. Florencio para deducir la demanda?

- a) Dispone del plazo de veinte días y es importante destacar que la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa prevé que si la demanda no se hubiere presentado dentro del plazo, el Juzgado o Sala, de oficio, declarará por auto la caducidad del recurso. No obstante, se admitirá el escrito de demanda, y producirá sus efectos legales, si se presentare dentro del día en que se notifique el auto.
- b) Dispone del plazo de diez días y es importante destacar que la Ley 29/1998 prevé que si la demanda no se hubiere presentado dentro del plazo, el Juzgado o Sala, de oficio, declarará por auto la caducidad del recurso y no se admitirá ningún escrito de demanda que se presente en el día de notificación del auto.
- c) Dispone del plazo de un mes y es un plazo absolutamente improrrogable.
- d) Dispone del plazo de treinta días y es importante destacar que la Ley 29/1998 no dispone nada sobre la rehabilitación del plazo y que es el Juzgado o Tribunal, según los casos, quien puede permitir que si la demanda no se hubiere presentado dentro del plazo se admita el escrito de demanda que se presente en el día de notificación del auto de caducidad.

115. Sobre la contestación a la demanda presentada. Por la parte recurrente (Sr. Florencio) se presentó la demanda, se dio traslado de la misma al defensor de la Administración demandada para que conteste en el plazo de veinte días. El suplico de la demanda era del siguiente tenor literal: “SUPlico: se dicte sentencia estimando el recurso contencioso administrativo y se declare no conforme a Derecho y nula la Orden de la Consejera de Agricultura, Agua y Medio Ambiente de la CARM por la que se desestimó el recurso de alzada interpuesto contra la resolución de la Dirección General de Desarrollo Rural y Forestal y se deje sin efecto la sanción y se reconozca el derecho del Sr. Florencio a ser cazador y el derecho al ejercicio con libertad de la actividad cinegética y la ampliación de la vigencia del permiso de armas obtenido”. Si fuera usted el Letrado/a de la Comunidad Autónoma que asume la defensa de la Administración demandada:

- a) Pondría de relieve que existe desviación procesal por absoluta discordancia entre el acto impugnado y una pretensión ejercitada, en concreto, la que hace referencia a que “se reconozca el derecho del Sr. Florencio a ser cazador y el derecho al ejercicio con libertad de la actividad cinegética con ampliación de la vigencia del permiso de armas obtenido”.
- b) Solicitaría la estimación de la demanda con costas para la Administración.
- c) No pondría de relieve la existencia de desviación entre lo pedido y el acto impugnado.
- d) En la contestación a la demanda solicitaría que la sentencia estimara el recurso contencioso administrativo por no ser conforme a Derecho el acto recurrido.

116. Imagine que el recurrente desea desistir del recurso contencioso administrativo; de conformidad con lo previsto en el art. 74.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa:

- a) El recurrente podrá desistir del recurso en cualquier momento posterior a la sentencia.
- b) El recurrente no podrá desistir del recurso.
- c) El recurrente podrá desistir del recurso en el momento de conocer la sentencia.
- d) El recurrente podrá desistir del recurso en cualquier momento anterior a la sentencia.

117. Sobre la Sentencia. Imagine que el Juzgado o Tribunal competente dictó sentencia y que la sentencia desestimó el recurso contencioso administrativo. Señale la respuesta que sería correcta.

- a) La sentencia desestima íntegramente el recurso contencioso administrativo y declara anulable la sanción impuesta al Sr. Florencio.
- b) La sentencia desestima íntegramente el recurso y declara conforme a Derecho la resolución impugnada.
- c) La sentencia desestima el recurso contencioso administrativo lo que equivale a pronunciar un fallo de inadmisibilidad del recurso contencioso-administrativo.
- d) La sentencia desestima íntegramente el recurso contencioso administrativo y declara nula de pleno derecho la resolución impugnada.

118. Sobre los recursos contra las sentencias o autos. De conformidad con la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa; en este supuesto, si se dictó sentencia desestimatoria del recurso contencioso administrativo por la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ, ¿qué recurso podría el recurrente interponer contra la misma?

- a) Recurso de súplica.
- b) Recurso de casación.
- c) Recurso de reposición.
- d) Revisión de alzada.

119. En la demanda, la defensa del D. Florencio alegaba que no eran ciertos los hechos reflejados en los boletines de denuncia redactados por los agentes medioambientales. Imagine que es usted el Letrado de la Comunidad Autónoma y debe presentar la contestación a la demanda y esgrimir sus argumentos frente a dicha alegación. Señale la respuesta correcta.

- a) Sería oportuno referirse al art. 77.5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas que señala que los documentos formalizados por los funcionarios a los que se reconoce la condición de autoridad y en los que, observándose los requisitos legales correspondientes se recojan los hechos constatados por aquéllos harán prueba de éstos salvo que se acredite lo contrario.
- b) Sería oportuno referirse al art. 77.5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas que señala que los documentos formalizados por los funcionarios a los que se reconoce la condición de autoridad y en los que, observándose los requisitos legales correspondientes se recojan los hechos constatados por aquéllos harán prueba de éstos y no se puede acreditar lo contrario.
- c) Sería oportuno referirse al art. 77.5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas que señala que los documentos formalizados por los funcionarios a los que se reconoce la condición de autoridad y en los que, observándose los requisitos legales correspondientes se recojan los hechos constatados por aquéllos harán prueba plena y absoluta.
- d) Sería oportuno referirse al art. 77.5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas que señala que los documentos formalizados por los funcionarios a los que se reconoce la condición de autoridad y en los que, observándose los requisitos legales correspondientes se recojan los hechos constatados por aquéllos no harán nunca prueba de éstos.

120. Imagine que en la Sentencia desestimatoria en el Fundamento de Derecho Quinto se dice: “De conformidad con el art. 139 de la LJA se imponen las costas a la parte recurrente” y en el Fallo de la sentencia se indica “con imposición de las costas a la Administración demandada”. Si fuera el Letrado de la Comunidad Autónoma que defiende a la Administración demandada:

- a) No haría nada porque la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa no prevé ninguna norma sobre subsanación y complemento de sentencias y no son aplicables las normas establecidas en la Ley de Enjuiciamiento Civil ni en la Ley Orgánica del Poder Judicial.
- b) No haría nada pues se trata de un error manifiesto y que, por ello, no puede ser subsanado.
- c) Apreciaría que existe un error en la sentencia y presentaría un escrito solicitando que se dicte Auto por el que se rectifique el Fundamento de Derecho Quinto y se impongan las costas a la Administración demandada.
- d) Apreciaría que existe un error en la sentencia y presentaría un escrito solicitando que se dicte Auto por el que se rectifique el error. En el escrito pediría que se rectifique el Fallo y que quede redactado en el sentido siguiente: “se imponen las costas a la parte recurrente”.

121. Sobre el recurso de casación. Imagine que la Sentencia dictada en este supuesto fuera susceptible de recurso de casación. Señale la respuesta correcta sobre el recurso de casación:

- a) Si el recurso de casación se fundara en infracción de normas emanadas de la Comunidad Autónoma será competente una Sección de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia.
- b) Si el recurso de casación se fundara en infracción de normas emanadas de la Comunidad Autónoma será competente la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo.
- c) Si el recurso de casación se fundara en infracción de normas emanadas de la Comunidad Autónoma el recurso se preparará siempre ante el Tribunal Supremo en el plazo de treinta días.
- d) La LJA no prevé nada para el supuesto en el que el recurso pretenda fundarse en infracción de normas emanadas de la Comunidad Autónoma.

122. En el caso hipotético en el que la representación del Sr. Florencio presentara escrito de preparación del recurso de casación por entender que en la sentencia desestimatoria se han infringido normas estatales que fueron alegadas en el proceso y el recurso de casación se tenga por preparado por el órgano jurisdiccional de instancia y, finalmente, es admitido por la Sección de Admisión de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo y la parte recurrente presenta escrito de interposición de recurso de casación; ¿qué intervención tendría la defensa de la Administración que fue parte demandada?.

- a) No tendría ninguna intervención en esta fase ante la Sección competente para la tramitación y decisión del recurso de casación.
- b) Se dará traslado del escrito de interposición del recurso de casación al Letrado/a de la Comunidad Autónoma, como parte recurrida, para que pueda oponerse al recurso en el plazo de treinta días. En el escrito de oposición no podrá pretenderse la inadmisión del recurso.
- c) Se dará traslado del escrito de interposición del recurso de casación al Letrado/a de la Comunidad Autónoma, como parte recurrida, para que pueda oponerse al recurso en el plazo de cinco días.
- d) Se dará traslado del escrito de interposición del recurso de casación al Letrado/a de la Comunidad Autónoma, como parte recurrida, para que pueda oponerse al recurso en el plazo de dos días.

123. Sobre el incidente de ejecución. En el caso de que la Sentencia desestimara el recurso contencioso administrativo interpuesto por el Sr. Florencio y la misma se elevara a la categoría de firme por no haber sido recurrida. Señale la respuesta correcta.

- a) La Administración pública deberá promover el incidente de ejecución de la sentencia para decidir, entre otras, cuestiones, qué órgano administrativo debe responsabilizarse de realizar las actuaciones.
- b) La sentencia es desestimatoria y, por lo tanto, considera conforme a derecho la sanción impuesta y, por ello, no es una sentencia que deba ejecutar el Juzgado o Tribunal.
- c) La Administración pública deberá promover el incidente de ejecución de sentencia para decidir, entre otras, cuestiones, cómo se va a cobrar la multa.
- d) La Administración pública podrá promover el incidente de ejecución de la sentencia para decidir, entre otras, cuestiones, el plazo en el que D. Florencio debe abonar la multa.

124. Sobre las medidas cautelares. En este supuesto, ¿entiende que la parte recurrente pudo pedir medidas cautelares?

- a) Sí; puede pedir las en cualquier estado del proceso.
- b) Sí; pero sólo puede pedir las antes de la interposición del recurso pues se trata de un supuesto del art. 29 y 30 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
- c) No puede pedir medidas cautelares.
- d) Sólo podrá pedir medidas por la vía del art. 135 LJCA.

125. Si por la defensa y representación del Sr. Florencio se presentara recurso de casación y por el órgano jurisdiccional competente se dictara un Auto teniendo por no preparado el recurso de casación y denegando el emplazamiento de las partes ¿qué recurso cabe contra el Auto teniendo por no preparado el recurso de casación?

- a) Recurso de apelación.
- b) Únicamente podrá interponerse recurso de queja, que se sustanciará en la forma establecida por la Ley de Enjuiciamiento Civil.
- c) Recurso de reposición.
- d) Recurso de alzada.

SUPUESTO PRÁCTICO 2

Tras la celebración de elecciones autonómicas, la Asamblea Regional procede a la elección de Presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. A continuación, se publica oficialmente su nombramiento, tomando posesión del cargo cinco días después.

A continuación, el Presidente establece mediante Decreto el número, la denominación y el ámbito de competencias de las Consejerías. En concreto, el citado Decreto dispone que la Administración de la CARM se organiza en dos Vicepresidencias y 13 Consejerías. En el mismo decreto se delega en el Vicepresidente primero la fijación del orden del día del Consejo de Gobierno y se le encomienda la condición de Secretario del Consejo de Gobierno y Presidente de la Comisión de Secretarios Generales. Por último, el repetido Decreto dispone que, desde su entrada en vigor, el Consejo de Gobierno cesante deja de estar en funciones.

Tras el nombramiento y la toma de posesión de los Vicepresidentes y Consejeros, el Vicepresidente primero formula consulta a la Dirección de los Servicios Jurídicos sobre quién debe presidir la Comisión de Secretarios Generales en caso de ausencia de aquel ya que tiene previsto un viaje que le impedirá asistir a la misma.

La primera reunión del Consejo de Gobierno cuenta con la asistencia del Presidente, el Vicepresidente segundo y siete Consejeros. En la misma se acuerda que el Consejo de Gobierno se reunirá con carácter ordinario cada dos viernes, pudiendo asistir a las mismas quien no siendo miembro del mismo, sea autorizado por el Presidente o uno de los Vicepresidentes. Otras decisiones adoptadas en dicho Consejo de Gobierno son la creación de una Comisión Delegada de Asuntos Económicos que será presidida por el Consejero de Economía y la autorización de la celebración de un Convenio con la Comunidad Autónoma de Andalucía. Posteriormente, el Secretario del Consejo de Gobierno ordena la inserción en el BORM del citado Convenio una vez firmado por las partes.

Además, el Consejo de Gobierno acuerda delegar en la Comisión de Secretarios Generales las futuras autorizaciones de la celebración de convenios con entidades públicas o privadas.

Por último, el Consejo de Gobierno aprueba los decretos por los que se establecen los órganos directivos de las diferentes Consejerías. En el Decreto de órganos directivos de la Consejería de Hacienda se dispone que todos los órganos directivos de la misma ostentarán la condición de alto cargo y que el titular de la Vicesecretaría depende directamente del Consejero.

En la siguiente reunión del Consejo de Gobierno se aprueban los Decretos de estructura orgánica de varias Consejerías y se decide la creación de un órgano colegiado con competencia de seguimiento y control de las actuaciones de otros órganos de la Administración Pública de la CARM en materia de eficiencia del gasto público, que estará presidido por el Vicepresidente Primero e integrado por representantes de las Consejerías competentes en materia de Hacienda, Organización Administrativa y Transparencia.

Posteriormente, el Consejero de Hacienda decide delegar determinadas competencias en el Secretario General y los Directores Generales de sus Consejerías. En concreto, delega en el Secretario General la resolución de recursos administrativos y de procedimientos de responsabilidad patrimonial. Cuando la Orden de Delegación es publicada en el BORM, un ciudadano insta su revisión de oficio por incurrir en causa de nulidad de pleno derecho al incluir materias que no son susceptibles de delegación.

Por otra parte, en el Consejo de Dirección de la Consejería se comenta la posibilidad de interponer un recurso contencioso-administrativo contra el Ministerio de Hacienda por determinadas actuaciones de este último en materia de financiación autonómica.

126. Según la Ley 6/2004, del Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno, la publicación del nombramiento del Presidente de la CARM se debe producir:

- a) En el BORM.
- b) En el BO de la Asamblea Regional.
- c) En el BOE.
- d) En el BOE y en el BORM.

127. De acuerdo con la Ley 6/2004 del Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno, la toma de posesión del Presidente de la CARM ha de tener lugar en el plazo de:

- a) Cinco días desde la publicación de su nombramiento.
- b) Cinco días desde su elección por la Asamblea Regional.
- c) Tres días desde la publicación de su nombramiento.
- d) Tres días desde su elección por la Asamblea Regional.

128. ¿Cuál es el número máximo de Consejerías que establece la Ley 6/2004 del Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno?

- a) 10.
- b) 12.
- c) No hay límite.
- d) 10, más un Vicepresidente.

129. ¿Es correcta la designación de dos Vicepresidentes?

- a) Si, porque la Ley 6/2004 no establece límite a esta figura.
- b) No, porque la Ley 6/2004 solo prevé la existencia de un Vicepresidente.
- c) Si, porque la figura del Vicepresidente es obligatoria ex lege.
- d) No, porque sumadas a las Consejerías, exceden del número máximo de miembros del Consejo de Gobierno.

130. ¿Puede el Presidente delegar en un Vicepresidente la fijación del orden del día del Consejo de Gobierno?

- a) Sí, porque el art. 32.2 de la Ley 6/2004 establece que el Vicepresidente ejercerá las funciones que el Presidente le delegue.
- b) Sí, porque el art. 32.1 de la Ley 6/2004 establece que el Vicepresidente suple al Presidente en caso de ausencia de éste a la sesión del Consejo de Gobierno.
- c) No, porque se trata de una competencia indelegable según el art. 6.2 de la Ley 6/2004.
- d) Solo respectos de los Consejos de Gobierno deliberantes, pero no así respecto de los decisorios.

131. Según la Ley 6/2004 del Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno ¿Cuándo deja de estar en funciones el Consejo de Gobierno?

- a) Cuando lo disponga el Decreto del Presidente.
- b) Cuando toma posesión el Presidente.
- c) Cuando cesa el Presidente.
- d) Cuando toma posesión el nuevo Consejo de Gobierno.

132. ¿Cuál debe ser la respuesta de la Dirección de los Servicios Jurídicos a la consulta del Vicepresidente primero sobre la presidencia de la Comisión de Secretarios Generales?

- a) En caso de ausencia del Presidente de la Comisión de Secretarios Generales, será sustituido por el Jefe del Secretariado del Consejo de Gobierno.
- b) En caso de ausencia del Presidente de la Comisión de Secretarios Generales, será sustituido por el Secretario General de la Presidencia.
- c) En caso de ausencia del Presidente de la Comisión de Secretarios Generales, será sustituido de acuerdo con el orden de prelación de las Consejerías.
- d) En caso de ausencia del Presidente de la Comisión de Secretarios Generales, y en defecto de decreto específico de la Presidencia, aquel será sustituido de acuerdo con el orden de prelación de las Consejerías.

133. ¿Cabe considerar válidamente constituido el Consejo de Gobierno en su primera reunión?

- a) Sí, porque están presentes el Presidente, un Vicepresidente y, al menos, la mitad de los Consejeros.
- b) No, porque deberían estar presentes los dos Vicepresidentes.
- c) Solo si alguno de los presentes tiene encomendado sustituir al Vicepresidente primero en la función de Secretario del Consejo de Gobierno.
- d) Si, porque están presentes al Presidente y más de la mitad de los Consejeros.

134. ¿Es legal que el Consejo de Gobierno se reúna ordinariamente cada dos viernes?

- a) Si, porque la ley exige una periodicidad quincenal o inferior.
- b) Si, porque es una libre decisión organizativa del Gobierno.
- c) No, porque la periodicidad mínima es semanal.
- d) No, porque no es materia de Acuerdo de Consejo de Gobierno, sino de Decreto del Presidente.

135. La autorización para que asistan a las reuniones del Consejo de Gobierno quienes no sean miembros del mismo, corresponde:

- a) Al Presidente, Vicepresidente o Consejeros.
- b) Al Presidente, por propia iniciativa.
- c) Al Presidente, a iniciativa propia, del Vicepresidente o de los Consejeros.
- d) No cabe autorizar la asistencia de quienes no son miembros del Consejo de Gobierno.

136. Las personas que, no siendo miembros del Consejo de Gobierno, sean autorizadas para asistir a sus reuniones:

- a) Pueden participar en las deliberaciones y deben guardar secreto sobre lo tratado en la reunión.
- b) Su función se limita a informar sobre algún asunto y deben guardar secreto sobre lo tratado en la reunión.
- c) Pueden participar en las deliberaciones si ostentan la condición de alto cargo, y están obligadas a guardar secreto.
- d) Su función se limita a informar sobre algún asunto y no están vinculados por la obligación de secreto.

137. De conformidad con la Ley 6/2004 del Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno, la creación de Comisiones Delegadas del Consejo de Gobierno se efectúa mediante:

- a) Decreto del Consejo de Gobierno.
- b) Decreto del Presidente.
- c) Acuerdo del Consejo de Gobierno.
- d) a) y b) son ciertas.

138. Las Comisiones Delegadas del Consejo de Gobierno son presididas:

- a) Por el Consejero competente por razón de la materia.
- b) Por el Presidente.
- c) Por el Consejero designado en el acto de creación de la Comisión Delegada.
- d) Por el miembro de la Comisión que designe el Presidente.

139. De acuerdo con la Ley 7/2004, de Organización y Régimen Jurídico de la Administración Regional, en relación a la tramitación de los convenios con otras comunidades autónomas:

- a) Al Consejo de Gobierno le corresponde autorizar la celebración del convenio y al Presidente su suscripción.
- b) Al Consejo de Gobierno le corresponde aprobar el proyecto de convenio y al Presidente su suscripción.
- c) Al Consejo de Gobierno le corresponde aprobar el proyecto de Convenio y al Consejero competente por razón de la materia su suscripción.
- d) Al Consejo de Gobierno le corresponde autorizar la celebración del Convenio y el Consejero competente por razón de la materia su suscripción.

140. ¿Es correcto que el Secretario del Consejo de Gobierno ordene la inserción en el BORM del Convenio de colaboración?

- a) Sí, porque le corresponde dar fe de los acuerdos de Consejo de Gobierno.
- b) Sí, porque le corresponde ordenar la inserción de los actos del Consejo de Gobierno en el BORM.
- c) No, porque le corresponde ordenar la inserción en el BORM de las disposiciones de carácter general.
- d) No, porque ordenar la inserción en el BORM, tanto de actos administrativos como de disposiciones generales es una competencia exclusiva del Presidente.

141. ¿Es correcto que el Consejo de Gobierno delegue en la Comisión de Secretarios Generales la autorización de la celebración de convenios con entidades públicas o privadas?

- a) Sí, porque ésta es una función del Consejo de Gobierno susceptible de delegación.
- b) No, porque se trata de una función indelegable del Consejo de Gobierno.
- c) No, porque la Comisión de Secretarios Generales no puede tomar acuerdos por delegación del Consejo de Gobierno.
- d) Sí, si lo prevén las normas de funcionamiento de la Comisión de Secretarios Generales.

142. De conformidad con la Ley 7/2004, de Organización y Régimen Jurídico de la Administración Regional, los decretos por los que se establecen los órganos directivos de las Consejerías se aprueban por el Consejo de Gobierno:

- a) A iniciativa de las Consejerías afectadas.
- b) A propuesta del Consejero competente en materia de organización administrativa.
- c) A propuesta del Presidente.
- d) a) y b) son ciertas.

143. ¿Es correcto atribuir en el Decreto de órganos directivos la condición de alto cargo a todos los órganos directivos de la Consejería?

- a) No, porque eso es una atribución que solo puede hacer el Presidente.
- b) No, porque sólo ostentan la condición de alto cargo los secretarios generales, secretarios autonómicos y directores generales.
- c) No, porque esa atribución debe hacerse en el Decreto que establece la estructura orgánica de la Consejería.
- d) No, porque la condición del alto cargo no puede ser diferente entre las distintas Consejerías.

144. ¿Se puede establecer en el Decreto de órganos directivos que el titular de la Vicesecretaría dependa directamente del Consejero?

- a) Sí, porque es una facultad propia de la potestad de autoorganización.
- b) No, porque ha de hacerse en el Decreto de estructura orgánica.
- c) Si, porque el Consejero es el órgano superior de la Consejería.
- d) No, porque los Vicesecretarios dependen directamente de los Secretarios Generales.

145. En relación a los Decretos por los que se establecen las estructuras orgánicas de las Consejerías, se aprueban por el Consejo de Gobierno:

- a) A propuesta de las Consejerías afectadas.
- b) A propuesta del Presidente.
- c) A propuesta del Consejero competente en materia de organización administrativa.
- d) A propuesta del Consejero de Hacienda.

146. Según la Ley 7/2004, de Organización y Régimen Jurídico de la Administración Regional, como regla general, los Decretos del Consejo de Gobierno son firmados:

- a) Por el Presidente y el Consejero competente en la materia.
- b) Por el Presidente y el Secretario del Consejo de Gobierno.
- c) Por el Presidente y el Vicepresidente.
- d) Por el Presidente, sin perjuicio de su refrendo por el Secretario del Consejo de Gobierno.

147. De acuerdo con la Ley 7/2004, de Organización y Régimen Jurídico de la Administración Regional, dadas las funciones y composición del órgano colegiado que se pretende crear, su creación se debe llevar a cabo mediante:

- a) Acuerdo de Consejo de Gobierno.
- b) Decreto de Consejo de Gobierno.
- c) Decreto del Presidente.
- d) Orden conjunta de las Consejerías afectadas.

148. La delegación de competencias de un Consejero:

- a) Se formaliza mediante Orden y los actos que se dicten por delegación ponen fin a la vía administrativa.
- b) Se formaliza mediante Resolución y los actos que se dicten por delegación ponen fin a la vía administrativa.
- c) Se formaliza mediante Orden y los actos que se dicten por delegación ponen fin a la vía administrativa, salvo cuando una Ley otorgue recurso ante el Consejo de Gobierno.
- d) Se formaliza mediante Resolución y los actos que se dicten por delegación ponen fin a la vía administrativa, salvo cuando una Ley otorgue recurso ante el Consejo de Gobierno.

149. En relación a la revisión de oficio de la Orden de Delegación del Consejero de Hacienda:

- a) Es competente para la resolución el Consejo de Gobierno, previos los informes preceptivos de la Dirección de los Servicios Jurídicos y del Consejo Jurídico de la Región de Murcia.
- b) Es competente para la resolución el propio Consejero, previos los informes preceptivos de la Dirección de los Servicios Jurídicos y del Consejo Jurídico de la Región de Murcia.
- c) Es competente para su resolución el Consejo de Gobierno, previo informe preceptivo del Consejo Jurídico de la Región de Murcia.
- d) Es competente para su resolución el propio Consejero, previo informe preceptivo del Consejo Jurídico de la Región de Murcia.

150. En el caso de que se pretenda interponer por parte de la Consejería de Hacienda un recurso contencioso-administrativo contra la Administración General del Estado ¿Cuáles serían los trámites a seguir con carácter previo en la interposición?

- a) Propuesta del Consejero competente y Acuerdo del Consejo de Gobierno.
- b) Propuesta del Consejero competente, informe de la Dirección de los Servicios Jurídicos y Acuerdo del Consejo de Gobierno.
- c) Propuesta del Consejero competente, informe del Consejo Jurídico de la Región de Murcia y Acuerdo del Consejo de Gobierno.
- d) Informe de la Dirección de los Servicios Jurídicos y Acuerdo del Consejo de Gobierno.